

Chile: razones de la excepcionalidad económica

Patricia Olave*

Introducción

La economía chilena es presentada internacionalmente como uno de los ejemplos más exitosos del proyecto neoliberal impulsado en América Latina durante la década de los ochenta.

Mientras el conjunto de la región resiente drásticamente los efectos de la crisis de la deuda, expresados en lo que se ha denominado la década perdida (por el rezago y la destrucción productiva, y el crecimiento exorbitado de la pobreza), la economía chilena muestra a partir de 1986 ritmos crecientes en el Producto Interno Bruto (PIB), bajos niveles de inflación, incremento sostenido de las exportaciones, reducción del endeudamiento externo y, en general, equilibrio en las variables macroeconómicas.¹

En este contexto, es indudable que el balance general del proceso económico chileno —desde el punto de vista del capital— es

* Coordinadora del Área de Economía Mundial y América Latina, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.

¹ Entre 1986 y 1989 el PIB chileno observó un crecimiento promedio anual de 7.2%, mientras el conjunto de América Latina lo hizo en 2.1% en el mismo periodo. La inflación en Chile promedió un 22% anual y en la región la tasa fue de 563% en los mismos años. Comisión Económica para América Latina (CEPAL). *Balance Preliminar de la economía de América Latina y El Caribe*, 1992.

satisfactorio, aunque profundamente inequitativo si se le evalúa desde el ángulo social y de la distribución del ingreso, puntos en que se expresa, al igual que para el resto de las economías latinoamericanas, el costo del ajuste.

El objetivo de este trabajo es señalar algunos elementos que nos permitan entender porqué esta economía conosureña presenta un comportamiento diferente a los demás países de la región.

Las particularidades del modelo chileno

La crisis de la deuda externa de 1982 afecta a la economía chilena como al resto de las economías latinoamericanas. Sin embargo, los grados de afectación son distintos ya que Chile se encontraba avanzado en su proceso de ajuste y estabilización.

El golpe militar de septiembre de 1973 no sólo significó el quiebre democrático sino, también, un cambio cualitativo del patrón de desarrollo que se venía impulsando. El agotado modelo sustitutivo de importaciones que no había presentado modificaciones importantes bajo el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) es reemplazado por un proyecto exportador especializado en bienes que cuentan con ventajas comparativas naturales, básicamente de tipo minero, forestal, pesquero y agroindustrial.²

El cambio del patrón de acumulación es acompañado por una política económica neoliberal ortodoxa, más claramente definida a partir de 1975, que aplica como recetario las propuestas de "saneamiento" económico: control inflacionario, equilibrio del déficit fiscal, de las cuentas externas, etcétera.

Los instrumentos de política económica son utilizados eficientemente para abrir camino al nuevo modelo y a los nuevos agentes económicos que lo sustentan.

Otro punto a favor de la reconversión exportadora chilena fueron las condiciones favorables de financiamiento externo en la década de los setenta: bajas tasas de interés internacionales y pocas exigen-

² En 1991 el perfil exportador se integraba con 48% de productos mineros (40% cobre), 13.5% agrícolas y marinos y 38% industriales. La composición de este último rubro corresponde a la industria alimentaria (17%), forestal y de la celulosa (5% cada uno), y química (5.5%). Las exportaciones de punta absorbieron 11% de la oferta total de Chile. Rosales, Osvaldo. "La segunda fase exportadora en Chile", *Comercio Exterior*, vol. 43, núm. 9, México, septiembre de 1993.

cias para acceder a nuevos préstamos privados —elementos que en general explican el enorme crecimiento de la deuda externa del conjunto de la región— y que en el caso de Chile fueron utilizados para modernizar los rubros destinados al mercado mundial.³

Así, a diferencia del resto de los países latinoamericanos, que inician sus procesos de ajuste en medio de la crisis deudora —exceptuando Brasil que realizó importantes transformaciones productivas desde mediados de los sesenta—, al terminar la década de los ochenta la economía chilena había modificado su patrón de acumulación, aprovechando las condiciones externas favorables, y había estabilizado las principales variables económicas.

Muchas de las interpretaciones que se han vertido para explicar el rápido avance de las transformaciones ocurridas en Chile señalan que el factor determinante fue el Estado de excepción instaurado con el golpe militar de 1973. Indudablemente que éste es un elemento importante, pero hay que recordar también que en otras economías, como la argentina, se trató de imponer un proyecto similar después del golpe militar de 1976, el cual, sin embargo, fracasa estrepitosamente. Para fines de los ochenta la economía argentina se debate entre la hiperinflación y una profunda crisis económica, con enorme caída de las inversiones, lo que incluso afectó a sus rubros de exportación tradicionales.⁴

Lo distintivo del caso chileno es que tempranamente se dio la definición de un nuevo modelo de desarrollo y de un nuevo proyecto societal, que rompió abruptamente con el concepto de Estado benefactor anterior. En este sentido, también tempranamente se articuló una nueva alianza entre el gobierno militar, sectores empresariales emergentes —ligados al modelo exportador— y una eficiente tecnocracia, educada en su mayoría en la Universidad de Chicago bajo los preceptos monetaristas y neoliberales.

³ La deuda externa chilena pasó de 3 261 millones de dólares (mdd) en 1973 a 9 413 mdd en 1980. Si observamos el comportamiento registrado por la inversión en maquinaria y equipo tenemos que este fue de 12 116 millones de pesos en 1973 y de 25 786 millones de pesos en 1980 (precios constantes de 1977). Banco Central de Chile. *Indicadores económicos y sociales 1960-1988*, Santiago de Chile, 1989.

⁴ La inversión bruta fija como porcentaje del PIB fue en el caso argentino de 22.2% en 1980 y de 8.7% en 1989; destaca la reducción de la inversión en maquinaria y equipo que pasó de 6.7% a 2.7% en los mismos años. La inflación, por su parte, llegó a alcanzar 4 924% en 1989. CEPAL. *Estudio Económico de América Latina y el Caribe*, 1982 y 1989.

No queremos minimizar la función del autoritarismo, sino sólo ponderarlo en un contexto más global. Como punto de partida, el autoritarismo permitió rearticular la economía bajo un nuevo proyecto y “disciplinar” a los distintos agentes económicos y sociales.

Desde el punto de vista del capital, si bien hasta mediados de 1975 se observaron disputas entre los sectores industriales ligados al modelo sustitutivo de importaciones y los nuevos empresarios exportadores, finalmente estos últimos logran imponer su proyecto.

Estos nuevos agentes empresariales conocidos como grupos económicos —modernos, aperturistas y emprendedores— se apoyan en la política económica que instrumentan los “Chicago boys” desde 1975 para reorganizar y reconvertir la estructura productiva con base en las actividades exportadoras más dinámicas, dejando en el camino a la fracción de la burguesía más tradicional que no pudo entrar a la modernización. Situación distinta a la observada en Argentina y en Brasil, por ejemplo, en donde subsisten pugnas y contradicciones entre las distintas fracciones del capital, lo que ha entorpecido el camino al proyecto exportador.

El “disciplinamiento” de los sectores burgueses tradicionales al nuevo modelo encuentra así explicación en la fuerte alianza de los grupos económicos y el gobierno, el cual contribuyó al fortalecimiento productivo y financiero de estos grupos a través de una creciente transferencia de recursos, principalmente desde los sectores más pobres de la población chilena.⁵

En el aspecto político y social es donde la acción autoritaria fue más clara. La fase represiva inicial que además del apresamiento y aniquilamiento de militantes, dirigentes políticos y gremiales, significó el cierre del Poder Legislativo, la supresión de partidos políticos y sindicatos, etc., borró de un plumazo el espacio tradicional contestatario que la sociedad chilena había ganado frente a la acción estatal.

El “disciplinamiento” salvaje fue transitando lentamente hacia uno de tipo más institucionalizado, conforme avanzó el proyecto

⁵ En 1987 el 10% de las familias chilenas más pobres participaban con 1.79% del ingreso total, en tanto que el 10% de las más ricas con un 39%. En 1969 el 28.5% de los hogares se encontraban en situación de pobreza, porcentaje que se incrementó a 41.2% en 1989. CEPAL. *Balances Preliminar de la economía de América Latina y El Caribe*, 1991. Programa de Economía del Trabajo (PET), *Informe Anual*, 1992.

neoliberal. Institucional en el sentido de las modificaciones legislativas que se hicieron, sobre todo en el aspecto laboral. El Plan Laboral instrumentado desde septiembre de 1979 crea las condiciones de precariedad del empleo, deja sin protección negociadora a los trabajadores frente a la parte patronal, la cual impone draconianas condiciones de trabajo y de salarios. Es decir, por ley se aseguran las condiciones de explotación y de ganancias que en parte importante conforman el fondo de acumulación utilizado en la modernización de los rubros ejes del modelo.

El abandono del anterior patrón industrial implicó numerosas quiebras y cierre de empresas, lo que unido al achicamiento del aparato estatal disparó el desempleo, el cual no pudo ser absorbido a pesar del dinamismo registrado en el sector exportador (véase Cuadro 1).

CUADRO 1
INDICADORES ECONÓMICO-SOCIALES 1970-1990

Conceptos	1970	1975 <i>recesión</i>	1980	1983 <i>recesión</i>	1990
Población (miles)	9 368	10 350	11 104	11 717	13 177
PEA(miles)	2 932	3 112	3 636	3 706	4 676
Tasa de desocupación (%)	5.7	14.5	10.4	15.0	5.7
PIB (\$ millones de 1977)	283 097	253 043	363 446	327 180	480 118
Tasa de inversión (% PIB)	15.0	15.4	16.6	12.9	21.0
Exportaciones FOB (US Mill.)	1 112	1 590	4 705	3 831	8 310
Importaciones CIF (US Mill.)	-956	-1 529	-5 469	-2 845	-7 065
Grado de apertura ext. (%)	35.5	34.9	54.1	46.3	57.4
Deuda Exterior total (US Mill.)	3 123	4 854	11 084	17 431	17 451
Inflación (%)	32.5	374.7	31.2	23.1	27.3
Ingreso mínimo legal (1980 = 100)	n.d.	75	100	78	67
Gasto social p/cap. (US 1976) en salud, educación y vivienda	72.4	56.4	75.8	60.9	54.9
Asignación familiar obreros (1980 = 100)	122	123	100	78	42

FUENTE: Datos oficiales tomados de Díaz, Alvaro. *El capitalismo chileno en los 90: crecimiento económico y desigualdad social*, Santiago de Chile, Ed. PAS (ONG), Serie Documentos de análisis, julio de 1991.

En un contexto de creciente desempleo, de una política salarial altamente contractiva y de elevada represión, es como puede ser entendido el “disciplinamiento” de la sociedad chilena o, mejor dicho, la “estabilidad social” observada durante el periodo militar.

El disciplinamiento de todas las clases y fracciones al proyecto exportador es quizá uno de los elementos explicativos más importantes del “éxito” chileno, sobre todo si lo comparamos con otras economías en donde las pugnas interburguesas han impedido la consolidación de un proyecto central, o en donde los sindicatos han jugado un papel contestatario y han obstaculizado el proceso de ajuste económico.

En la literatura especializada es común encontrar la idea de que la participación del Estado en Chile se ha apegado de manera ortodoxa —quizá como ningún otro caso— al paradigma de subsidiaridad neoliberal, en el sentido de no regulación y no intervención. Sin embargo, esta es una verdad a medias.

En general, la participación estatal fue bastante ortodoxa en instrumentar aquellas medidas que aseguraran el restablecimiento del equilibrio económico, tanto interno como externo, de acuerdo a las propuestas del ajuste fondomonetarista. Por otra parte, mantuvo el control de algunas variables como la de precios relativos, las cuales a través de modificaciones sistemáticas del tipo de cambio, de la tasa de interés, de las tarifas públicas, de los precios agrícolas, etc., afectaron favorablemente la estructura de precios generales y las ganancias de la economía en favor de los bienes transables. En igual sentido podría ubicarse su participación en la fijación salarial y en general en las condiciones laborales.

El mito de los subsidios del Estado es mucho más evidente cuando se observa la acción gubernamental en la década de los ochenta. Son muchos los ejemplos que podríamos citar en este sentido, sin embargo, sólo señalaremos algunos.

En 1982 el sistema financiero chileno atraviesa por una seria crisis. El movimiento especulativo de los grupos económicos, en su voracidad por controlar tanto las empresas productivas exportadoras como los bancos y financieras, puso en peligro de quiebra a muchas de sus empresas.

El gobierno no dudó en implementar operaciones de rescate, las cuales significaron un déficit del Banco Central de más de 500 millones de dólares.⁶

En 1985 el gobierno anuncia un nuevo programa de privatizaciones que esta vez incluiría a grandes empresas públicas. Estas empresas generaban un superávit importante, por lo cual no se pudo argumentar que el objetivo era eliminar el déficit fiscal como fue la situación de la primera fase de privatizaciones en 1973.

Según declaraciones del ministro de Hacienda, en esta ocasión las privatizaciones pretendían expandir y consolidar la economía del mercado así como apoyar la recapitalización de los bancos y empresas luego de la crisis de 1982.

Al finalizar 1989 el programa de privatizaciones estaba prácticamente concluido. El gobierno traspasó al sector privado nacional y extranjero, a precios subvaluados, más de 30 empresas importantes en telecomunicaciones, electricidad, química, acero, petróleo, aviación, entre otras.⁷

En septiembre de 1979 el general Pinochet anunció que en la medida que se habían alcanzado las principales metas de reorganización y saneamiento económico, se pasaría a una etapa de “modernización nacional”. Las siete modernizaciones, como se les ha denominado, abarcaron la política laboral, seguridad social, educación, salud, descentralización regional, agricultura y aparato judicial.

El objetivo de las reformas era transferir el mayor número de responsabilidades al sector privado, permitiendo con ello un mejor funcionamiento del mercado.⁸

La salud, la educación, la seguridad social fueron privatizadas. De este paquete reviste singular importancia la privatización en 1981 de la seguridad social; los fondos de jubilación pasan a ser manejados por un número reducido de empresas Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), que adquieren una importancia creciente. Para 1990 las AFP concentraban un tercio del ahorro

⁶ Marcel, Mario. “El financiamiento del gasto social”, Colección Estudios CIEPLAN, núm. 31, Santiago de Chile, marzo de 1991.

⁷ Sáez, Raúl. “Las privatizaciones de empresas en Chile”, en Muñoz, Oscar (compilador), *Después de las privatizaciones: hacia el Estado regulador*, Santiago de Chile, CIEPLAN, 1993.

⁸ Foxley, Alejandro. *Experimentos neoliberales en América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.

total del sector privado, monto equivalente al 10% del PIB global. Parte importante de estos ahorros fueron canalizados al mercado de valores y a la compra de empresas públicas, privatizadas después de 1985.

El gobierno ha contribuido de manera importante en el fondo de ahorro acumulado por las AFP, ya que al momento de la privatización se comprometió a seguir pagando las cotizaciones durante el tránsito del antiguo al nuevo sistema previsional. El costo ha sido un déficit creciente en este rubro, que acumulado entre 1982 y 1990 llegó a representar un 6% del PIB, y que fue financiado con la disminución de otros gastos sociales⁹ (véase Cuadro 1).

Así, la reducción del gasto social no sólo sirvió para equilibrar el déficit público, sino también para transferir ingresos e incrementar la concentración de capital en el sector privado.

En relación al manejo de la política tributaria podemos observar que las reformas de 1975 y sobre todo la de 1984 aumentaron la recaudación fiscal vía los impuestos indirectos (sobre el consumo a las personas físicas), ya que los impuestos directos a las empresas fueron disminuidos para estimular el ahorro, premiar el esfuerzo productivo y disminuir la evasión fiscal.¹⁰

Finalmente, el broche de oro lo constituye la participación del gobierno en la preparación del Plebiscito de octubre de 1988.¹¹

Consciente que la consulta popular le mostraría el rechazo a 15 años de pobreza, injusticia y represión, el gobierno militar se apresuró a tomar medidas de amortiguamiento, como fue la expansión del gasto y el consumo expresada en un crecimiento de la oferta monetaria que superó el 20% real, y rebajas tributarias con un costo superior a los 1 000 millones de dólares durante 1988.¹²

⁹ Budnevich, Carlos. "Implicancias financieras de las privatizaciones en Chile: lecciones del periodo 1985-1990", en Muñoz, Oscar (compilador), *Después de las privatizaciones*. . . , *op. cit.*

¹⁰ Andrea, Giovanni. "Sistema fiscal, ajuste y pobreza", Colección Estudios CIEPLAN, núm. 31, Santiago de Chile, marzo de 1991.

¹¹ La recuperación económica registrada desde 1986, como hemos señalado, no fue acompañada por una redistribución, sino, por el contrario, por una concentración mayor de la riqueza. La enorme "deuda social" y los costos de la represión fueron cobrados, en parte, por la mayoría de la población chilena con el rechazo al régimen militar votando ¡No a Pinochet!

¹² Marcel, Mario. *Op. cit.*

Caricaturizando, podríamos señalar que la participación económica del gobierno militar previa al Plebiscito cayó en el "populismo", tan criticado por la asepsia neoliberal.

Podríamos concluir esta primera parte destacando que el "éxito" del modelo chileno obedece a una fórmula eficaz que combinó la definición temprana de un nuevo modelo económico, una fuerte y pragmática participación estatal, con el aderezo represivo para crear la "estabilidad" social requerida y el disciplinamiento de todas las clases, cuestiones que no han logrado cuajar en conjunto en la mayoría de las economías latinoamericanas.

Los límites del modelo

El favorable comportamiento del sector exportador chileno, expresado en el creciente volumen de ventas, competitividad y diversificación de mercados, es resultado de la modernización y especialización productiva que se ha instrumentado.¹³

Sin embargo, y a pesar de los avances, el modelo tiene debilidades estructurales que plantean un punto de interrogación respecto a su viabilidad a largo plazo.

La modernidad y el *boom* exportador se ha dado fundamentalmente en relación a ventajas comparativas naturales, es decir, en bienes de tipo primario, fácilmente sustituibles y muchos de ellos perecederos, como las frutas y otros productos agropecuarios y pesqueros.

Si hasta ahora el crecimiento de las exportaciones ha sido importante es porque ha encontrado un nicho favorable en los mercados internacionales. Sin embargo, dada la fragilidad del comportamiento económico de los países centrales o el cambio en los patrones de consumo, esta tendencia podría variar.

El peligro es más evidente si observamos que son justamente los bienes primarios los que están siendo crecientemente marginados de los flujos comerciales a nivel internacional.

¹³ Las exportaciones totales en 1973 eran de 1 247.5 mdd y en 1990 alcanzaron los 8 310 mdd. Es decir, en 1990 se vendía casi ocho veces más que a principios de los setenta. CEPAL. *Balances Preliminar de la economía de América Latina y El Caribe*, 1991. Banco Central de Chile. *Indicadores Económicos*. . . , *op. cit.*

El destino de las ventas era en 1991 de 30% al Pacífico Asiático, 32% a la Comunidad Económica Europea, 14% a América Latina y 18% a América del Norte. Rosales, Osvaldo, *op. cit.*

Esta debilidad, si bien fue vislumbrada en los últimos años del gobierno militar, adquiere mayor relevancia en la discusión actual. Muchos personeros del gobierno democrático, entre ellos el ex ministro de Economía, Carlos Ominami, así como algunos otros autores —vinculados a la CEPAL— plantean la necesidad de pasar a una segunda fase exportadora con base en ventajas adquiridas, con productos de mayor valor agregado y en la exportación de servicios.¹⁴

Sin embargo, ello requeriría de una modificación en la estrategia industrial y tecnológica, así como de una sustancial elevación de la inversión, cuestiones que, a pesar de la importancia estratégica que representan, se mantienen en la indefinición, porque continúa la bonanza del actual boom exportador.

Aunque mucho se ha asimilado el modelo chileno a los proyectos asiáticos de reciente industrialización, quizá por la rapidez de sus resultados y por la fuerte pero especializada participación estatal, existen diferencias muy grandes, no sólo por el tipo de exportaciones en que se han especializado, sino también por la visión estratégica en ambos casos.

Las economías asiáticas partieron con un atraso enorme; progresivamente y de manera dirigida han consolidado centros de desarrollo tecnológico y capacitación a todos los niveles educativos y empresariales, estrechamente vinculados a su proyecto económico, cuestión que en Chile no ha pasado de ser una preocupación a futuro.

El gobierno democrático: rupturas y continuidades

Luego de la derrota en el Plebiscito de 1988, el gobierno militar convoca a elecciones —a fines de 1989— en las que triunfa una alianza de partidos denominada Convergencia Democrática, quedando como presidente el demócrata cristiano Patricio Aylwin.¹⁵

El proyecto político democrático representa una ruptura frente al régimen anterior, aunque los militares continúan ejerciendo una

¹⁴ Rosales, Osvaldo. *Op. cit.*

¹⁵ En la alianza participa la Democracia Cristiana (DC), un sector del Partido Socialista (PS) y otras corrientes de izquierda, con la excepción del Partido Comunista (PC).

importante cuota de poder, con el general Pinochet como jefe máximo del Ejército. Este hecho impone límites concretos al campo de acción del nuevo gobierno, de allí el ritmo gradual de las transformaciones que se impulsan en el plano político y social.

En materia económica se observa una continuidad del proyecto exportador y de la política económica, la que sigue vigilando los equilibrios macroeconómicos como un factor fundamental.

El matiz que podría diferenciar el nuevo enfoque de desarrollo es la preocupación por alcanzar crecimiento con una mayor equidad distributiva, como una manera de aminorar el enorme costo social del ajuste anterior.

Las expectativas creadas en torno al proyecto democrático, sobre todo por los sectores más golpeados, eran mucho más elevadas de lo que en la práctica se ha avanzado, y ello fundamentalmente por la definición gubernamental de no transgredir el equilibrio económico; con lo cual se afirma que la distribución —para no crear presiones inflacionarias— evolucionará a un ritmo compatible con la capacidad productiva y de acuerdo a los niveles de inversión que se puedan alcanzar.

Durante el periodo militar la tasa de inversión fue en promedio de 15% del PIB, lo que permitió un crecimiento acumulado —promedio anual— de aproximadamente 2.6%, con caídas fuertes en 1975 y 1983, años de recesión, y ascensos entre 1986-1989, en donde el promedio fue 7% anual. Pese al crecimiento del producto en estos últimos años, los salarios reales continúan sin recuperar el nivel de principios de los años setenta. Mientras, la pobreza se agudiza notoriamente: para 1989 el 41.2% de los hogares se ubicaban en el nivel de pobres, en relación al 25% de 1970, lo cual pone en duda el planteamiento neoliberal que primero asegura crecer y luego distribuir.

La idea de desarrollo con mayor equidad en un marco de equilibrio macroeconómico constituye así un fuerte reto para el gobierno democrático, meta que según cifras oficiales se estaría logrando (véase Cuadro 2).

La fase de inversión crece incluso más que durante el régimen anterior; el PIB se mantiene alto, las exportaciones continúan dinamizándose, aunque también lo han hecho las importaciones —producto de la mayor inversión. Esto si bien es peligroso para el superávit de divisas, es positivo en tanto ha disminuido el desempleo.

CUADRO 2
INDICADORES ECONÓMICO-SOCIALES BAJO
EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO

Concepto	1990	1991	1992
PIB (tasa de crecimiento anual a precios de 1980) ^I	2.0	5.8	9.5
Tasa de desocupación (%) ^{II}	5.7	7.3	5.0
Tasa de inversión (% PIB) ^{III}	21.0	n.d.	20.0(a)
Exportaciones FOB (millones de dólares) ^{IV}	8 310	8 929	9 965
Importaciones FOB (millones de dólares) ^V	7 037	7 354	9 170
Deuda Externa total (millones de dólares) ^{VI}	18 576	17 360	18 775
Inflación (dic-dic) ^{VII}	27.3	18.7	14.0(b)
Ingreso mínimo legal (1978 = 100) ^{VIII}	65.3	71.1	n.d.
Asignación familiar n. d. (obreros 1970 = 100) ^{IX}	34.1	42.6	

FUENTES: Para I, II, IV, V, VI, y VII CEPAL. *Balance preliminar de la economía de América latina y el Caribe 1992*.

III) Cuadro 1 y Banco Central de Chile. *Evolución de la economía en 1991 y perspectivas para 1992*, Santiago de Chile, septiembre de 1991.

VIII, IX) Programa Economía del Trabajo (PET). *Informe Anual, 1991-1992*.

(a) Estimación Banco Central de Chile.

(b) Tasa de noviembre a noviembre.

Cabe señalar, con el fin de ponderar los éxitos actuales, que los elevados y sostenidos niveles de crecimiento y de inversión, si bien han permitido mejorar algunos indicadores que perfilan las condiciones de vida de la población trabajadora, tales mejoras son relativas si se las aprecia en una perspectiva más amplia.

Tal es el caso de la desocupación, por ejemplo, en donde recién —a fines de 1992— se han alcanzado las tasas históricas en la mate-

ria, de alrededor del 5.5%, porcentaje que correspondía en los sesenta a un desempeño económico más débil que el actual.

Los resultados económicos obtenidos en un marco de continuidad del modelo exportador han llevado a diversos autores a plantear que el gobierno de Alwyn se ha convertido en un eficaz administrador de la expansión económica, cuestión que a su vez le ha permitido fortalecer sus relaciones con los sectores empresariales.

Así, el proyecto chileno bajo el gobierno de la Concertación continúa como una “excepción” dentro de América Latina. Este ha retomado la línea del pragmatismo neoliberal, lo que en un contexto de mayor democracia, y resultados económicos exitosos, permiten fortalecer el discurso oficial que indica que se transita hacia un capitalismo con “rostro más humano”. Planteamiento que parece no se modificará con el cambio de gobierno de fines de 1993.

Cabe mencionar que en este proceso de tránsito “ordenado” hacia la democracia, la izquierda “renovada”, aglutinada en lo que se denomina Concertación Socialista y que participa en el gobierno, ha jugado un papel muy importante.¹⁶

La izquierda opositora, representada fundamentalmente en el MIDA (Movimiento de Izquierda Allendista, encabezado por el PC), si bien ha mantenido su peso electoral —8% en 1992 y 5% en las elecciones de diciembre de 1993— es minoritaria frente a la Concertación Democrática. Esto es mucho más claro si se considera que por el sistema electoral “pinochetista”, ni siquiera alcanzó un diputado.

La derecha, por su parte, también se encuentra dividida, y no muestra capacidad de levantar un proyecto distinto al que se está instrumentando.

En este panorama, lo que parece perfilarse es una tendencia al centrismo político, que convierte al esquema chileno en un proyecto “manejable” y con cierta estabilidad social —por lo menos hasta ahora—, situación que no presentan la mayoría de los países latinoamericanos.

¹⁶ La Concertación Socialista ha retomado los planteamientos de *Crecimiento Integrado con Equidad* de la CEPAL, incluso con participación de alguno de sus miembros en la elaboración de dicha propuesta, misma que están tratando de promover en el conjunto de América Latina. Este sector de la izquierda mantiene estrechos vínculos con el empresariado chileno.